Globethics Repository



Chile

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Rojas Hernández, Jorge
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-14 21:47:28
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/218899

Chile. El difícil y truncado camino hacia el desarrollo

Jorge Rojas Hernández

Chile se encuentra en una encrucijada. Su modelo de crecimiento se agotó y requiere cambiar de estrategia, centrada excesivamente en la dimensión macroeconómica, volcando sus esfuerzos en el cambio de las estructuras socioeconómicas y culturales. Asimetrías y enormes distancias sociales destruyen el sentido del «nosotros», fraccionan el territorio, agotan los tejidos de la vida social y bloquean las posibilidades de progreso regional y nacional. Junto a una economía sólida y sostenible, el camino hacia el desarrollo pasa hoy por mayor igualdad, más democracia, más participación, mejor educación, más oportunidades para los pobres y mayor confianza en los ciudadanos.

En la mitad de su periodo presidencial, Ricardo Lagos no hizo ningún anuncio espectacular. Habló de *las dos caras de Chile*, del «Chile emprendedor, que crece, que progresa, que da un salto en su educación, que se moderniza en todos sus rincones; el Chile que ofrece cada día una mejor calidad de vida a sus familias». La *otra cara* muestra «un país sumergido en un clima negativo y confuso; un país que parece salpicado de escándalo. En los años recientes, no sin dolor y tensiones, Chile ha venido haciéndose cargo de zonas oscuras de su historia. Hay quienes quieren instalar en Chile una cultura en la que todo está permitido para hacer dinero fácil y rápido. Hay quienes piensan que cualquier medio es legítimo para lograr sus fines»

Jorge Rojas Hernández: sociólogo; doctorado por la Universidad de Hannover, profesor titular del Departamento de Sociología y subdirector de Formación e Investigación del Centro de Investigaciones Ambientales - EULA, de la Universidad de Concepción, Chile.
Palabras clave: desarrollo, cultura política, tendencias, Chile.

(discurso del 21 de mayo de 2003). Esta situación ha tenido paralizado al Gobierno, apelando a la necesidad de que las «instituciones funcionen», mientras ministros, subsecretarios, diputados, secretarios ministeriales regionales y funcionarios públicos desfilan frente a jueces y algunos de ellos incluso terminan detenidos o procesados, acusados de corrupción y fraude al fisco, sospechosos de haber recibido dinero a cambio de favores políticos.

La modalidad de capitalismo salvaje, aún imperante en el país, ha instalado la idea de que cualquier medio es legítimo para alcanzar sus fines. El «nuevo chileno» avanza como puede en el mercado, sin importarle su vecino ni reflexionar sobre los métodos empleados. Consecuente con ello se ha instalado en el país la cultura de la acumulación individual, de los ganadores o triunfadores rápidos, del desprecio a las instituciones, al patrimonio y a la vida colectivos. El negocio hace patria y prestigia la vida social. Y la farándula representa la liberación envasada en forma televisiva. La sociedad se construye individualmente, mientras la política penumbra en la liviandad, sinsentido y desencanto.

La instalación del conservadurismo y el inmovilismo político

Desde el declive del crecimiento –a fines de los años 90– la economía chilena se ha entrabado sin recuperar los índices de la década pasada. Existe en el empresariado, oposición y Gobierno nostalgia de aquellos años de holgado crecimiento (superior a 7%). La década de los 90 fue para Chile la de mayores éxitos económicos y sociales, que hizo surgir a los «autocomplacientes», clase dirigente autorreferida, segura de que el país alcanzaría el desarrollo en el bicentenario. Pero esta meta se aleja. El trauma de 1973, del golpe militar y la ruptura democrática, 30 años después, aún está presente en la sociedad y se manifiesta en el temor al debate, a discutir alternativas. Resulta preferible aferrarse al estilo incivilizado de desarrollo económico en curso y a los pequeños avances. El conservadurismo, la resistencia al cambio, se transforma en ideología oficial, con el peligro de consolidar el estancamiento y frustrar el anhelado progreso más sostenible.

La oposición conservadora tampoco lo hace mejor: denuncia los males, sin presentar alternativas de solución. Se mantiene en la fórmula mágica de «escuchar y resolver los problemas de la gente». Joaquín Lavin, el candidato permanente de la derecha y alcalde de Santiago, no ha tenido éxito en gobernar una comuna que concentra todos los problemas del país: pobreza, graves índices de contaminación, desocupación, problemas de urbanización,

de transporte, de inseguridad ciudadana, de calidad de vida, etc. Sus propuestas limitan con el realismo mágico (p. ej., la creación de un balneario popular en un borde del contaminado río Mapocho, o la instalación de alarmas de seguridad que reemplacen las fracasadas y ridiculizadas «torres de seguridad» que colocó en el centro de la ciudad). Su última iniciativa ha generado indignación en los trabajadores y en la Iglesia, por atentar contra el descanso y la vida familiar: abrir el comercio en el centro de Santiago los domingos. Asustado con la posibilidad de llegar a La Moneda, ya no habla del cambio como en la campaña presidencial pasada; es una consigna demasiado revolucionaria para ser tomada en serio por la derecha.

Tres gobiernos de la Concertación muestran el desgaste de la coalición. Patricio Aylwin fue el presidente de la reconciliación nacional, aunque los problemas de violación a los derechos humanos, perpetrados por la dictadura, aún persisten sin solución. Eduardo Frei se preocupó de modernizar la economía y de la inserción internacional del país, siguió privatizando bienes públicos (p. ej. los de las sanitarias) y avanzó en los tratados de libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos, que serían coronados por el gobierno de Ricardo Lagos. Frei se despreocupó de los problemas relacionados con la justicia social y las minorías indígenas. Apoyó megaproyectos, unidos a graves externalidades ambientales y a la destrucción de la vida productiva y comunitaria local. Lagos, el tercer gobierno de la concertación y actual presidente, representaba la esperanza de la justicia social y profundización de la democracia, temas pendientes de la economía y la política. El desgaste político produce desbande y desorientación. Los partidos o algunos de sus líderes buscan salvarse optando por un «camino propio», distanciándose del Gobierno, como lo hace Adolfo Zaldívar, presidente duro de la Democracia Cristiana (DC), quien critica fuertemente al Gobierno, declarando incluso absurdamente el fin de la coalición. Por su parte, el Partido por la Democracia (PPD), envuelto en escándalos de corrupción, también se distancia: Guido Girardi, su presidente, declara el aislamiento del Gobierno. Los socialistas se mantienen fieles pero sin presentar tampoco alternativas. Sólo Lagos salva a la coalición, gracias a su alta popularidad.

El conservadurismo se observa también en la vigencia de la Constitución de Pinochet. Los senadores designados y vitalicios, la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el mantenimiento del sistema político binominal, la no aprobación de la ley de divorcio, etc., en fin, la falta de una política que reconozca el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Incluso la positiva actitud del comandante en jefe del

Ejército, Juan Emilio Cheyre, al declarar: «Nunca más una clase política que fue incapaz de controlar la crisis que culminó en septiembre de 1973. Nunca más a los sectores que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que provocaron. Nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo», no concita la reconciliación, en la medida en que las FFAA no contribuyen a clarificar el paradero de los desaparecidos ni las violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo el régimen militar.

Estado subcontratista, dinero y política

La subcontratación de importantes funciones y la privatización de la actividad política ha introducido fuertemente el dinero en ámbitos y responsabilidades estatales. El Estado subcontratista perdió sus antiguas funciones de árbitro de intereses contrapuestos, y se desprendió también de su papel de defensor de los recursos naturales y del bien común. Este nuevo Estado subcontrata las funciones que no puede o no quiere cumplir frente al capital nacional e internacional. «Con relativa frecuencia, las empresas interpretan los mercados que se abren mundialmente, y sus *exit options* en la competencia entre localizaciones, como una liberación de la sobrerreglamentación estatal, y especulan con 'mercados libres de interferencias y regulaciones' dentro de la economía global» (Messner, pp. 32-33). En el análisis de Messner sobre la gobernanza falta la contextualización. Los gobiernos débiles carecen con frecuencia de voluntad política para construir país y región a partir de la defensa de lo endógeno. Buscan atraer capitales internacionales desregulando y desnacionalizando los recursos naturales, o desprotegiendo el trabajo y el medio ambiente. Con estas medidas esperan lograr crecimiento, empleo, estabilidad y paz social. Pero a menudo consiguen lo contrario. El capital no persigue fines altruistas. Solo el control del Estado y de los ciudadanos lo obliga a aportar al desarrollo local y nacional.

Existe la imperiosa necesidad de transformar el Estado: acercarlo a los ciudadanos y profesionalizarlo. El Gobierno se propone avanzar en alguna medida en este terreno. Así, por ejemplo, se plantea disminuir los cargos de confianza política de 3.500 a 750 (lo que en cierta jerga se denomina «cuoteo político»). Se busca también modernizar la gestión pública. Pendientes quedarán problemas esenciales como la descentralización y consolidación de las regiones, así como las que necesitan mayor autonomía financiera y política (p. ej, la elección democrática de los gobiernos regionales). Sin descentralización no es posible el desarrollo de las regiones (Rojas Hernández, pp. 141-160). La defensa descontextualizada del Estado unitario y sobre todo los intereses

parlamentarios, impiden legislar racionalmente sobre este importante tema. El papel del Estado en un mundo globalizado ha cambiado, pero ello no ha sido asumido en el país; por ejemplo, se discute tardíamente el comportamiento ético-tributario de las grandes empresas mineras. La mayoría no paga impuestos, los evaden o minimizan mediante subterfugios legales (declaración de no utilidades o pérdidas, uso del recurso de la depreciación acelerada, ventas «baratas» a sus socios, endeudamiento con compañías vinculadas a tasas elevadas, pago de sobreprecios por cargos de tratamiento, etc.). La Comisión Minera del Senado investiga el comportamiento tributario de las empresas y se estudia también la posibilidad de aplicar un *royalty* a la minería, tratándose del recurso más importante del país.

El Gobierno tiene, como consecuencia de los tratados de libre comercio, un fuerte déficit en sus programas sociales, especialmente para poner fin a los campamentos de extrema pobreza e implementar el Plan AUGE (de cobertura universal de salud). Buscando financiar estos programas se optó por subir el IVA de 18% a 19%, en lugar de regular mejor los aportes del capital internacional, como el minero, al desarrollo regional y nacional. En la medida en que la política pierde autonomía y se somete al poder de los intereses económicos, adopta una lógica instrumental. Los escándalos descubiertos recientemente (pago de sobresueldos a funcionarios por parte de empresas privadas, en algunos casos creadas para ese exclusivo propósito y utilizando recursos públicos) han desprestigiado aún más la política, cuya estructuración pasa por el mercado. Los políticos precisan grandes recursos para comprar espacios televisivos, radiales y periodísticos. La política está inmersa en la industria de los medios de comunicación, siendo el dinero su principal condicionante. Como una solución posible a este grave problema se discute un proyecto de ley que otorgue financiamiento público a los partidos, limitando ingresos y gastos y regulando los recursos externos. Tal financiamiento resolverá solo uno de sus problemas, pero su arraigo y credibilidad en la sociedad no dependen tanto del dinero, sino de su renovación valórica y programática. El nuevo Estado y la regeneración de la política pasan por reconocer la autonomía a las regiones, proteger los recursos naturales y el medio ambiente, y conceder un mayor protagonismo ciudadano.

Progresos materiales e individualización

Chile ha tenido importantes progresos materiales. Los gobiernos de la Concertación han mejorado considerablemente la infraestructura del país (mediante la construcción de vías nacionales y regionales, aeropuertos, puertos,

escuelas, viviendas, etc.); también la pobreza (de 45% a 20%) y los campamentos de extrema pobreza se han reducido. Efectivamente, el censo de 2002 muestra importantes avances materiales en la vida de la población en comparación con el de 1992; por ejemplo, en 2002, 78,8% tenía lavadora en su hogar (contra 48,2% en 1992); 82,1% tenía refrigerador (en 1992, 54,6%); 87% tenía televisor a color (52,6% en 1992); 51,5% teléfono fijo (en 1992: 23,6%); 20,5% computador y 10,2% conexión a internet. Cabe decir que muchos de estos artículos se consiguen gracias a créditos con abultados intereses: el chileno medio está endeudado en tres veces sus ingresos.

En esta década la población alfabeta subió 1,2 puntos, alcanzando 95,8%. Por su parte, la incorporación laboral de la mujer llegó a 35,6% (que en 1992 era de 29,5%). En relación con la composición de los ocupados, es importante destacar el crecimiento significativo del sector terciario: 43,1%, mientras que la ocupación primaria disminuyó en 20,5% y el secundario se redujo 1,1%. Estos datos indican la tendencia a la tercerización de la economía en la última década. La población contrajo también su ritmo de aumento: entre 1992 y 2002 creció a una tasa de 1,2 personas por cada 100 habitantes (en el decenio 1982-1992 fue de 1,6%). El tamaño medio nacional de los hogares es de 3,6 personas, menor al de 1992 (de 3,9). El hogar nuclear representa 57% (1992: 57,9%), el unipersonal 11,6% (1992: 8,3%), el extenso 21,9% (en 1992: 23,4%). Es decir, disminuye el hogar extensivo y aumenta el unipersonal. Por su parte, la población urbana también aumentó, alcanzando 86,6% en 2002 (1992: 83,5%), retrocediendo la rural a 13,4% (1992: 16,5%). Han crecido las ciudades intermedias y la Región Metropolitana de Santiago, planteando nuevas demandas por infraestructura y cambios de uso del suelo. En fin, ha disminuido el apego al catolicismo. Los datos censales muestran cambios significativos en la sociedad chilena: envejecimiento de la población, progresos materiales, avances en los procesos de individualización, mayor laicización y escaso apego a las instituciones.

Zonas oscuras de la realidad y disolución del «nosotros»

Chile enfrenta su ingreso al nuevo siglo como un país social y territorialmente fraccionado. En el pasado, los chilenos tuvieron un fuerte sentido de pertenencia, dado por la continuidad de sus instituciones, sus tradiciones democráticas, el afán de progreso, la solidaridad, la lucha por la libertad y la justicia social. La dictadura militar y el mercado ultraliberal destruyeron ese sentimiento y el «nosotros». La estrategia de dominación consistió en refundar el país desde un individuo solo, desorganizado, sin amarras, valores ni

vida colectiva. Un individuo sin capacidad de negociación, sin identidad, separado y desconfiado del vecino, en competencia con el compañero de trabajo, humanamente empobrecido. Las privatizaciones –de la economía, educación, salud y seguridad social– apuntaban a generar un marco social apto para la construcción individual de la sociedad, asegurando de esta forma la dominación del capital y el alejamiento definitivo del peligro de la revolución social. Los estados de sitio y de emergencia, la prohibición de la acción sindical y de la política, las detenciones masivas, la tortura y las desapariciones, formaban parte de esta estrategia «refundacional». En este sentido, no es raro que hoy, sea precisamente la Unión Demócrata Independiente (UDI) –partido heredero y cómplice político del régimen militar– quien proponga poner fin al problema de los desaparecidos con una fórmula legal que conjugue la compensación económica con el fin o «aceleramiento» de los procesos y la declaración de muerte legal. De esta manera, se comprarían el olvido y la justicia, se expropiaría al vencido el último rincón propio que le queda: el recuerdo y respeto a sus seres queridos en secuestro. El olvido de los vencidos es el último triunfo al que aspiran los vencedores. Hacer desaparecer legalmente a los desaparecidos, aparte de constituir una perversidad, implicaría blanquear definitivamente el terror del golpe militar. El Gobierno recibe propuestas de los partidos para avanzar en la solución a los problemas –entre ellos, pobreza y abandono– de los olvidados familiares de los desaparecidos.

A tres décadas del golpe militar no es posible olvidar la trágica historia que sacudió al país. Sin releer este capítulo negro de la historia no se puede entender a la sociedad actual. Los informes sobre Desarrollo Humano del PNUD proporcionan datos certeros sobre las transformaciones de la sociedad chilena, aunque sin considerar el trágico contexto histórico en el que se produjeron. Así por ejemplo constata que «la política parece tener una relevancia menor para las prácticas y representaciones de la convivencia social» (p. 108). Efectivamente es así y ello se explica por los cambios de la política y la cultura imperantes en la sociedad. El Informe constata un bajo nivel de adhesión al régimen democrático (45%), una gran indiferencia frente al tipo de régimen (32%) y, afortunadamente una relativa baja adhesión a un régimen autoritario (18%). Todo ello se mezcla con un fuerte sentimiento de impotencia, de sentirse instrumentalizado por los poderosos (63%), de sentirse marginado de lo que pasa a su alrededor (37%), de que su opinión no cuenta para nada (65%), y de que los políticos no están en absoluto preocupados por sus problemas (solo 13% piensa que ellos se preocupan por lo que les pasa). Impotente, «es la expresión subjetiva de los pobres, y consiste en

sentirse no solo explotado y excluido en lo económico, sino además humillado y despreciado» (p. 112).

En el ámbito del trabajo tampoco se observan grandes avances. En efecto, para 74% de las personas entrevistadas el sistema económico implica sentimientos negativos, relacionados con inseguridad, enojo y pérdida; 58% considera el trabajo como un medio para conseguir recursos económicos (solo para 29% constituye una posibilidad de realización personal); 54% evalúa como negativos los cambios laborales ocurridos en el país (PNUD, p. 96). El trabajo fue en el pasado un importante factor de cohesión e integración social, constructor de valores e identidad personal. El Informe del PNUD incursiona también en la realidad de la familia, constatando que tan solo para 15% de los entrevistados es «un lugar de amor»; 24% la considera «un refugio frente a los problemas», mientras que para 28% es «una fuente de tensiones y problemas» y para 31% se revela como «una institución en crisis» (p. 21). Este preocupante panorama familiar constituye otra «zona oscura» del Chile de 2003. En este contexto cabe preguntarse cómo se integra y cohesiona la sociedad chilena. La integración –si es que realmente existe– se ha dado en las últimas décadas mediante el consumo, la participación privada en la compra de bienes materiales y culturales. Esta modalidad es muy diferenciada y efímera, dependiendo de los niveles de ingresos y relación con el mercado y sus sistemas de pago y crédito. «Los nuevos ciudadanos tienden a agruparse en torno de pequeñas tribus y el consumo es una de las herramientas más poderosas de cohesión colectiva» (Halpern, p. 26). Surge una especie de chileno «natural», abstraído de su condición sociocultural. Se alimenta con una actividad política de baja intensidad, separada de la sociedad y consensuado en torno de los equilibrios macroeconómicos. Se trata de una política descomprometida y pragmática, basada en el acceso posible a «cosas» y en la que renuncia ideológicamente a cambiar la sociedad.

Para que el consumo sea un integrador social debería democratizarse. Pero la tendencia actual apunta a su concentración, como también la del ingreso y de la propiedad. Debido a la volatilidad de la integración, «lo chileno se ha vuelto poco creíble», «lo chileno no existe fuera de las experiencias, los triunfos y los fracasos cotidianos de los habitantes del país», y «la identidad y la pertenencia que parecen desvanecerse es la de un Chile largamente prometido y esperado, definido por una forma de relaciones sociales: integración e igualdad» (PNUD, pp. 64-82). La «inverosimilitud de lo chileno», que traba la sociabilidad y el «vaciamiento de una identidad colectiva», impiden que surja un verdadero proceso de integración y cohesión social. Esta cruda realidad

explica el desinterés de la clase política por la gente, la escasa o nula participación que se le permite en los asuntos importantes, así como también la indiferencia que muestran muchos jóvenes por la política y los eventos electorales. La escasa adhesión al régimen democrático también encuentra su explicación en la carencia de un proyecto de país en el que creer y por el cual luchar.

La «zona oscura» de las desigualdades

Otra «zona oscura» que presenta la sociedad chilena es la desigualdad social, que a pesar de la democracia y de los avances en la reducción de la pobreza, aún presenta una fuerte visibilidad. «Existe la percepción de que no ha habido una transición en lo profundo de la vida social chilena, desde la restauración conservadora ocurrida en la dictadura» (Bengoa, p. 28). Las diferencias sociales han aumentado, como lo prueba la mala distribución del ingreso y su carácter marcadamente clasista. Los pobres, en el pasado, tenían más «dignidad» y esperanzas; ahora se les abandona a la suerte del mercado. Son «libres» de intercambiarse en los márgenes de lo prescindible, manteniéndose en lo mínimo. En este submundo aprenden la rutina de ser pobres. El mercado los «incluye» en su periferia extrema, en los márgenes del consumo, en la precariedad mal pagada del trabajo estacionario, acarreando cartones, seleccionando basura, cuidando y lavando autos, transportando carros de compras, como «nanas» o empleadas del hogar, empaquetando las frutas para la exportación o fileteando el pescado destinado a los mercados del Norte; cumpliendo alguna tarea menor, no especializada, en alguna parte del ciclo forestal, en alguna gran tienda del comercio. Los pobres están en todas partes, aportando –durante largas jornadas– al crecimiento económico y soportando formas modernas de esclavitud, sin derechos, futuro ni patria. Se encuentran «incluidos» desintegradamente, molestos pero sometidos. Son discriminados y estigmatizados socialmente por el hecho de ser pobres. De esta manera, en la impotencia, aprenden a callarse y a aceptar lo que son. Constituyen esa parte mayoritaria del país que no tiene ni puede, que no cuenta, que no es, que no tiene «viabilidad», como sostienen los economistas neoliberales.

El neopopulismo conservador de la UDI los quiere conquistar ofreciéndoles «cosas», sin reconocerles derechos ciudadanos. Se acercan a ellos en forma paternalista como en la época de la hacienda, del gran patrón o hacendado. Los partidos de izquierda y de centro tampoco proponen alternativas serias de solución a sus problemas, aunque están presentes en su discurso y en el imaginario de la igualdad y de la equidad. El gobierno de Lagos asumió bajo este mandato popular, pero le ha sido difícil impulsar –y le ha faltado tam-

bién voluntad política– las reformas profundas que abran paso a mayores niveles de justicia e igualdad social. Si este gobierno de centroizquierda no realiza estas reformas, ¿quién las hará en el futuro?, ¿un gobierno de derecha encabezado por Lavin u otro líder?; impensable, desregularía aún más las relaciones capital/trabajo y terminaría por privatizar lo poco que queda: el cobre, la ENAP (Empresa Nacional del Petróleo), los recursos de las políticas sociales, los fondos para las universidades, etc. Todo se haría para «favorecer» a los más pobres, pero nada cambiaría en la vida de ellos, como siempre sucede con los gobiernos de derecha.

Pobreza del capital humano

La buena educación es un indicador fundamental de desarrollo. No obstante los esfuerzos de la reforma educativa, el país adolece aún de graves problemas de calidad, especialmente en el ámbito de la educación pública, como lo demuestran estudios internacionales recientes (OCDE, Unesco, etc.). Es difícil superar dificultades que se arrastran por décadas. La postergación del magisterio y la controvertida municipalización de la educación, que constituyó un traspaso irresponsable de una tarea del Estado a municipios sin recursos ni experiencia educacional. Los problemas se agravan en la medida en que nos alejamos de las grandes ciudades e incursionamos en las regiones, las comunas pobres o las zonas rurales. No deberían existir diferencias sustanciales entre una escuela rural, una urbana de una ciudad media o las de la metrópoli de Santiago o de las regiones.

Durante las últimas cuatro décadas, el ritmo de acumulación de capital humano ha sido lento en Chile, en comparación con los países de más rápida evolución dentro de nuestra muestra, que son Corea, Malasia y México. Mientras éstos aumentaban la escolarización promedio de sus poblaciones a un ritmo de 1,8, 1,4 y 1,1 años adicionales por década, respectivamente, entre 1960 y 2000, Chile en cambio sólo incrementó la suya en 0,7 años por década. Lo anterior significa que, a este ritmo, necesitaría alrededor de 40 años para alcanzar el actual nivel de Corea y más de 50 años para equiparar a Nueva Zelanda (Brunner/Elacqua, p. 18).

Chile posee un *stock* bajo de capital acumulado (7,89 años de escolarización). Según el Informe citado, la mitad de la fuerza de trabajo no posee educación secundaria y «sólo 14% de la población adulta supera el umbral mínimo requerido para desempeñarse eficazmente en la sociedad de la información» (p. 22). Esta realidad representa un escollo en el corto plazo para responder a los enormes desafíos de la apertura. La escuela efectivamente puede contribuir a que un joven supere su situación de pobreza, como ha ocurrido en los países desarrollados. En décadas pasadas –en el modelo sustitutivo de importaciones– ella cumplió un papel activo como palanca de movilidad

social, pero con el advenimiento del mercado y las privatizaciones, la educación pública se deterioró y desvalorizó, la inversión pública se redujo drásticamente y, por lo mismo, su retorno disminuyó.

En medio de la contextualización, se ha redescubierto que la familia juega un papel fundamental en el proceso de enseñanza. Resulta importante el nivel de educación de los padres, el tiempo que pasan éstos en la casa durante los días de trabajo, los libros y revistas de lectura en el hogar, la estructura del núcleo familiar (Casassus, p. 115). La desintegración de la vida familiar, mencionada anteriormente, constituye en este sentido un factor que agrava aún más los problemas de rendimiento escolar. Por lo tanto, mejorar la calidad de la educación pasa necesariamente por mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Pasa por avanzar en forma decisiva en la superación de los problemas de desigualdad, por resignificar la vida y la comunidad.

Epílogo

¿Dará Chile en los próximos años un salto cualitativo hacia el desarrollo? Tendría que hacerlo, no le queda otra alternativa. Si no avanza se quedará rezagado e incluso podría perder lo que ha avanzado. Una economía sólida, con índices macroeconómicos positivos, con acuerdos internacionales complejos y amplios, como el que se firmó con la UE, constituyen una buena plataforma de despegue. La firma reciente del TLC con EEUU también podría contribuir a ello: Gobierno, empresarios y partidos oficialistas y de oposición ven en el TLC oportunidades de negocios para Chile. Se espera que las exportaciones a EEUU crezcan 18% en el corto plazo, favoreciendo especialmente al sector agroalimentario (carnes blancas y rojas), frutas, salmón, textil, cátodos de cobre refinado, forestal; 87% de los 9.720 productos exportados a ese país, entrarán con arancel cero en el momento de ponerse en marcha el Tratado (*Estrategia*, 9/6/2003; *Siete*+7, 6/6/2003). Las aprensiones provienen de la agroindustria (por su desgravación lenta) y de la agricultura tradicional, especialmente del trigo (temor a desaparecer). Otro desafío es el aumento del proceso de desnacionalización, como consecuencia de la compra de empresas, como ya está sucediendo con las textiles. No obstante la mayor amenaza la sienten los trabajadores, sobre todo los pobres que laboran precariamente en PyMEs: su competitividad se hace a expensas de la mano de obra, y los procesos de «reconversión» que esta nueva apertura exigirá, puede significar la quiebra de empresas y el empeoramiento de las condiciones de trabajo. «Las empresas para ser competitivas obligan a las mujeres a

trabajar en talleres en condiciones de extrema precariedad, hacinadas, sin ventilación, encerradas con llave, sin casino. Muchas trabajan de corrido todo el día, la noche y medio día siguiente, luego se van a sus casas para volver al otro día» (Patricia Coñomán, presidente de la Confederación Textil y de Vestuario, *La Nación*, 24/6/03). El TLC estipula que cada país se rige por sus propias leyes laborales; en Chile se discute flexibilizarlas aún más.

Para dar un salto cualitativo hacia el desarrollo, el progreso económico, cultural, científico y tecnológico debe volverse hacia adentro, hacia la sociedad, combatiendo con fuerza y eficiencia los problemas de desigualdad, mejorando la calidad y oportunidades educacionales y laborales para los jóvenes y sectores más pobres de la sociedad. De la misma manera se deben cuidar los recursos naturales y proteger el medio ambiente. El reconocimiento de los derechos a los pueblos indígenas sería una prueba de madurez cívica y de aceptación del pluralismo etnocultural. Proteger la cultura local, la riqueza endógena y potenciar al máximo el capital humano, constituyen condiciones fundamentales para dar el salto. A ello puede contribuir el reciente resurgimiento del optimismo y la confianza entre el Gobierno y los agentes económicos, incentivado por los acuerdos internacionales. Solo falta potenciar la subjetividad y confianza en los ciudadanos.

Bibliografía

Bengoa, José: «La desigualdad» en José Bengoa, Francisca Márquez y Susana Aravena: *La desigualdad*, SUR, Santiago, 2002.
Brunner, José Joaquín y Gregory Elacqua: *Informe capital humano en Chile*, Universidad Adolfo Ibáñez, mayo de 2003.
Casassus, Juan: *La escuela y la (des)igualdad*, LOM, Santiago, 2003.
Instituto Nacional de Estadísticas (INE): *Censo 2002*, Santiago, 2003.
Halpern, Pablo: *Los nuevos chilenos y la batalla por sus preferencias*, Planeta, Santiago, 2002.
Messner, Dirk: «Estructurar la globalización. Nuevas exigencias a los Estados, las regiones, las empresas y la política de desarrollo» en Altenburg Tilman y Dirk Messner (eds.): *América Latina competitiva. Desafíos de la economía, la sociedad y el Estado*, IAD/GTZ/Nueva Sociedad, Caracas, 2002.
PNUD: *Desarrollo Humano en Chile. Nosotros los chilenos: un desafío cultural*, Santiago, PNUD, 2002.
Rojas, Jorge: «Chile en el bicentenario: el sueño del desarrollo sustentable» en *Atenea* Nº 485, Concepción, 2002, pp. 141-160.